REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y NUEVE CIVIL MUNICIPAL HOY
CINCUENTA Y UNO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y
COMPETENCIA MÚLTIPLE

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil
veintidós (2022)

PROCESO	CONSTITUCIONAL (TUTELA)
DEMANDANTE	JUAN CARLOS BASCO CADAVID
DEMANDADOS	CARBOTRANS COLOMBIA S.A.S.
RADICADO	110014003069 2022 00004 00

Agotado el trámite establecido por la Ley se procede a emitir fallo dentro de la acción de tutela de la referencia en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

JUAN CARLOS BASCO CADAVID solicita la protección de su derecho fundamental de petición el cual, afirma, le está siendo vulnerado CARBOTRANS COLOMBIA S.A.S.

Informa actor que el 4 de octubre de 2021 presentó, vía correo electrónico, derecho de petición a la empresa CARBOTRANS COLOMBIA S.A.S, la que fue recibida el 5 del mismo mes, fecha en la que fue leído, sin que a la fecha de presentación de la demanda haya recibido respuesta.

Ante lo anotado solicita al Despacho la protección del derecho fundamental de petición y se le ordene a la demandada de respuesta a su solicitud.

TRÁMITE

Mediante auto calendarado 12 de enero del año que avanza se avocó conocimiento de la presente acción y se ordenó oficiar a la sociedad accionada quien dentro del término concedido contestó en los siguientes términos.

El representante legal de la accionada indica que es cierto que el accionante presentó derecho de petición pero que el mismo ya fue contestado al correo electrónico por él suministrado y solicita se declare la existencia del hecho superado y aporta prueba en tal sentido.

Ante lo informado por la demandada, se procedió a realizar comunicación con el accionante quien manifestó que, si bien recibió repuesta, lo cierto es que, la misma se encontraba incompleta pues no se pronunció con respecto a los puntos 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 14.

Se procedió a requerir a la accionada para que se pronunciara con respecto a lo manifestado por el accionante quien guardó silencio.

CONSIDERACIONES

El artículo 86 de la Constitución Nacional establece que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Este mecanismo de orden residual, solamente encuentra procedencia cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por lo que, se pone al descubierto que la intención y espíritu del constituyente

fue la de introducir una figura alterna o paralela a los juicios y a los procedimientos que constituyen vía común para hacer valer los derechos cuya función se encuentra genéricamente asignada a la administración de justicia y garantizada por la Carta Política.

Es necesario, por tanto, destacar como reiteradamente lo ha expuesto la Corte Constitucional, que, tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio especial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En lo que concierne al derecho de petición, el art. 23 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Dentro del abundante desarrollo jurisprudencial que ha tenido este derecho, se han decantado, en forma general, los siguientes requisitos y presupuestos:

“... c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

Por su parte, el artículo 32 de la ley 1755 de 2015 consagra que:

“Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes.

Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.

Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.”

Hechas las precisiones que preceden, entra el Despacho a resolver.

PROBLEMA JURÍDICO Y CASO CONCRETO

En el caso que hoy ocupa la atención del Juzgado el accionante persigue que se le dé respuesta al derecho de petición que presentó a la accionada el pasado 4 de octubre de 2021 el que solicitó varios documentos referentes a la relación laboral que mantuviera ella.

El representante legal señala que ya dio respuesta a la petición presentada por el actor y allegó prueba en tal sentido.

Ante lo informado por la pasiva el Despacho procedió a revisar la documental enviada encontrando que le asiste razón a la activa puesto que, como bien lo anota el actor, lo solicitado

en los puntos 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 14 no fue resuelto, a pesar del requerimiento hecho por esta instancia.

Como puede verse, el derecho de petición presentado no fue contestado en su totalidad; razón por la cual se ordenará al representante legal de CARBOTRANS COLOMBIA S.A.S. o a quien haga sus veces, para que en un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta decisión, de respuesta a lo en los puntos 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 14 del escrito a la dirección física y electrónica informada por el actor.

Sin más consideraciones, el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal, hoy Cincuenta y uno de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley

RESUELVE:

1. CONCEDER la solicitud de amparo invocada por el señor JUAN CARLOS BASCO CADAVID frente al derecho de petición, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. En consecuencia, ordenar al representante legal de CARBOTRANS COLOMBIA S.A. o a quien haga sus veces, para que en un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta decisión, de respuesta a lo solicitado en los puntos 4, 5, 8, 9, 11, 12 y 14 del derecho de petición presentado por el señor JUAN CARLOS BASCO CADAVID, a la dirección física y electrónica informada por él.

De las diligencias tendientes a dar cumplimiento a este fallo, deberá la entidad accionada informar lo pertinente a esta sede judicial.

3. Notifíquese por el medio más expedito, tanto a la parte accionante como a la accionada en la presente acción, lo decidido en este fallo.

4.- En caso de no ser impugnada la presente acción, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en la forma prevista en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

5.- En caso de ser impugnada dentro del término legal, por secretaria remítase inmediatamente al superior.

Notifíquese y cúmplase.

Firmado Por:

**Luis Guillermo Narvaez Solano
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 069
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bc9b89cf99853ac23c850de2a0c4aec3f58f63ac04e7f0777af85521df8930f9**

Documento generado en 24/01/2022 10:52:28 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>